



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: 0286/2020

ACTOR: ** ***** **

AUTORIDAD DEMANDADA: 1) SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS, 2) H. AYUNTAMIENTO Y 3) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todas DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

Aguascalientes, Aguascalientes, diecisiete de julio de dos mil veinte.

V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio de nulidad número 0286/2020, y;

R E S U L T A N D O:

I.- Mediante escrito presentado en Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, en fecha *seis de febrero de dos mil veinte*, remitido a esta Sala al día hábil siguiente, ** *****
***** compareció a demandar la nulidad del crédito fiscal que se deriva del estado de cuenta de fecha *veintisiete de enero de dos mil veinte*, emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del municipio de Aguascalientes con número de serie y folio ***** , por la cantidad de \$5,574.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), anexando al mismo las pruebas para acreditar su acción.

II.- En fecha *catorce de febrero de dos mil veinte*, se le requirió a la parte actora para que dentro del plazo de tres días exhibiera original o copia certificada del acto impugnado consistente en el estado de cuenta de fecha *veintisiete de enero de dos mil veinte*, emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del municipio de Aguascalientes con número de serie y folio ***** , por la cantidad de \$5,574.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), mismo que se le tiene por cumplido en auto de fecha *cinco de marzo de dos mil diecinueve*, fecha en que se

admitió a trámite la demanda; se recibieron las pruebas ofrecidas y se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas.

III.- Mediante proveído de fecha *veinticuatro de junio de dos mil veinte*, se recibió la contestación de demandada formulada de manera conjunta por las autoridades demandadas 1) SECRETARÍA DE FINANZAS, 2) H. AYUNTAMIENTO y 3) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA todas del MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, pronunciándose esta Sala en relación a las pruebas ofrecidas y se ordenó correr traslado al actor para formular ampliación de demanda.

IV.- En audiencia de juicio celebrada el *diecisiete de julio de dos mil veinte*, se desahogaron las pruebas admitidas a las partes, se agotó el periodo de alegatos, y se citó el asunto para sentencia definitiva, que hoy se dicta; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- **Competencia.** Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 51, párrafo segundo, y 52, tercer párrafo, de la Constitución Local; 33 A y 33 F, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1°, primer párrafo, 2°, fracción I, y 59 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, toda vez que se impugnan actos que se atribuyen a varias autoridades del Municipio de Aguascalientes; que el particular afirma le causan agravio.

SEGUNDO.- **Existencia del acto impugnado.** La existencia del acto impugnado se acredita con la descripción de la misma que realiza la parte actora en el escrito inicial de demanda, en el cual, especifica que resulta inexistente el documento que sustente de manera coherente y con los medios de prueba que exige la ley para la determinación de la infracción, ya que en ningún momento pudieron constatar dichos hechos al ser inexistentes; manifestación que se adminicula a la confesión contenida en la contestación de demanda producida por la Secretaría de Finanzas del Municipio de



Aguascalientes, quien adujo como cierto que existe una imputación de crédito fiscal en contra del actor como se advierte del comprobante con número de serie y folio *********, de fecha *veintisiete de enero de dos mil veinte*, expedido por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, confesión expresa que hace prueba plena, con fundamento en los artículos 247 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, de aplicación supletoria a la materia Contenciosa Administrativa, según lo establecen los artículos 3° y 47 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, y por tanto, se tiene por reconocido que existe o debe de existir la determinación del crédito fiscal que consigna dicho comprobante.

TERCERO.- Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se estudian las causales de improcedencia y sobreseimiento señaladas por la autoridad demandada, de conformidad con los artículos 26, fracción I, y 27, último párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

Al respecto de las causales de improcedencia señaladas tanto por la SECRETARÍA DE FINANZAS y el H. AYUNTAMIENTO, ambos del MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, quienes manifiestan que al no existir ilegalidad en los actos de autoridad que se les atribuyen, debe sobreseerse el presente juicio.

Tal postulación, no resulta ser una causal de improcedencia en sí misma, los razonamiento por los cuales la demandada consideró que no existe ilegalidad en su actuar al haberse infringido un deber de cuidado y poner en riesgo tanto la integridad personal del actor como de terceras personas y en consecuencia imponerse la infracción correspondiente, serán analizados en el

Considerando que estudie los conceptos de nulidad vertidos en contra del acto impugnado.

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, con Registro: 1000423, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 4. Controversias constitucionales Primera Parte – SCJN, Materia(s): Constitucional, Tesis: 109, Página: 4639, de rubro y texto siguientes:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia, hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.

De igual manera, señalan que el actor consintió el acto al efectuar el pago de la multa generada por la infracción de tránsito a la cual se hizo acreedor.

Resulta **INFUNDADO** el hecho de que al haber cubierto por el actor el importe de la multa impuesta, signifique consentimiento de su parte, por el contrario, presentada su demanda, una vez que tuvo conocimiento del adeudo, dentro del término previsto por el artículo 28, segundo párrafo segundo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes; es decir, dentro de los **quince días** posteriores a la fecha en que enteró el pago, supone que éste se realizó bajo protesta conforme al artículo 48, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes que a la letra dice:

Artículo 48.- Los contribuyentes tendrán derecho a hacer el pago de créditos fiscales bajo protesta, cuando se propongan interponer recursos o medios de defensa.

El pago así efectuado, no implica consentimiento con la resolución o disposición a que se dio cumplimiento, pero extingue el crédito fiscal.



El pago bajo protesta, se acreditará en cualquiera de las siguientes formas:

(...),

III.- Dentro del término que establezcan las leyes *se intentará* los recursos o *medios de defensa que procedan*, en caso contrario, el pago se tendrá como definitivo.

Luego, al haber intentado el Juicio Contencioso Administrativo, dentro de los quince días siguientes a la fecha en la que entero el pago, que establece el artículo 28 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, ello es una forma de acreditar el pago bajo protesta, es decir, la demanda de nulidad implica la protesta del pago realizado, sin que pueda significar que el actor consintió el pago, ya que en el supuesto, solo podría ocurrir en el caso de que el actor no hubiere ocurrido a impugnar el crédito fiscal oportunamente, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la demandada.

Al efecto es aplicable la tesis de la séptima época, sostenida por los tribunales colegiados de circuito, publicada en la página 187 de Semanario Judicial de la Federación, tomo 145-150 Sexta Parte, cuyo rubro y texto dicen:

PAGO DE UN CRÉDITO FISCAL SIN LA EXPRESIÓN "BAJO PROTESTA", NO SIGNIFICA SU CONSENTIMIENTO, SI SE OCURRIÓ AL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO. Aun cuando la quejosa haya pagado el crédito fiscal a su cargo sin reserva alguna, en otras palabras, sin la expresión "bajo protesta", eso no significa que hubiera consentido el pago, ni la fuente que le dio origen, porque habiendo pagado y ocurrido al juicio ante el tribunal administrativo mencionado, dentro del término establecido en el ordenamiento legal que lo regula, a pesar de que formalmente no se hubiera probado que el pago se hizo "bajo protesta", ese pago no entraña consentimiento del acto combatido. Pretender lo contrario, sería tanto como exigir una formalidad, o más aún una solemnidad, incompatible con el derecho moderno que trata de proteger intereses o derechos legítimos aun cuando no se hayan observado formalidades o solemnidades estas últimas ya excluidas del derecho y las primeras, cuando existen, no son para perjuicio del interesado, sino en beneficio del mismo, a quien el cumplimiento de las formalidades le advierte y salvaguarda de las consecuencias perjudiciales derivadas de la realización de actos sin su observancia.

Por su parte, la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, manifiesta

que se actualiza la causal de **inexistencia del acto impugnado**, toda vez que la parte actora impugna un **requerimiento de pago** emitido en el Procedimiento Administrativo de Ejecución que no constituye por sí una **resolución de carácter definitivo** que pueda ser impugnada ante esta Sala.

Es **INFUNDADA** la causal de improcedencia invocada, toda vez que, de la demanda en su conjunto y atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que lo que impugna la parte actora no es el requerimiento de pago, sino la **determinación de la multa**, (resolución de multa que se le pretende cobrar), la cual afirma **nunca se le notificó**, ya que solamente recibió el requerimiento de pago, sin saber qué funcionario determinó el monto de dicha multa y sin que se siguiera el procedimiento para su determinación. En consecuencia, la parte actora exhibió el requerimiento **no como acto impugnado**, sino como prueba de la existencia de la determinación de la multa impuesta.

Siendo que esta Sala, ante el desconocimiento manifestado por la parte actora, en términos de lo establecido por el artículo 31, fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, requirió a las demandadas la exhibición de la resolución impugnada y de su constancia de notificación, sin que hubieren atendido dicho requerimiento, como se analizará más adelante.

De ahí que no se decrete el sobreseimiento del presente juicio como lo solicitan las autoridades demandadas.

CUARTO.- En virtud de que no se actualiza causal de improcedencia alguna, lo que procede es estudiar los conceptos de nulidad que hace valer el accionante, los que por economía procesal no se transcriben, aunado a que no es un requisito formal de las sentencias¹.

¹ Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la novena época, localizable con número de registro: 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro señala: **"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."**



Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la demandada, sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37² de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

QUINTO.- ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD

Atendiendo a que la demanda es un todo y debe ser analizada en cada una de sus partes, así como a la causa de pedir que asiste a la demandante al haber expresado la lesión o agravio que estima le causa el acto impugnado y los motivos que originaron ese agravio³, de los argumentos expuestos por la actora, se estudian LOS FORMULADOS EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, EN EL APARTADO DENOMINADO HECHOS DE ORIGEN.

Aduce la parte actora el desconocimiento del crédito fiscal impugnado negando que el mismo le haya sido notificado, ya que jamás se acompañó la resolución determinante emitida por la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes y que se derivada del crédito fiscal con número de serie y folio *********, por la cantidad de \$5,574.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), de fecha *veintisiete de enero de dos mil veinte*, en donde se contiene el acto de molestia, para poder estar en aptitud de impugnarlo.

Tal desconocimiento, obligaba a las autoridades demandadas a exhibir la resolución impugnada con sus respectivas razones y fundamentos, ni la constancia de su notificación; a fin de

² **ARTICULO 37.- En la contestación de la demanda, no podrá cambiarse ni la motivación ni los fundamentos de derecho de la resolución impugnada (...).**

³ Es aplicable por analogía la jurisprudencia de la novena época sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 38 del tomo XII, de agosto de dos mil, cuyo rubro señala: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.**

que el actor estuviere en aptitud de controvertirla, sin que así lo hubieren hecho pues no produjeron contestación a la demanda, por lo que **ante tal omisión, se concluye que dejaron en estado de indefensión a la parte accionante**, esto, porque al no haber exhibido el documento que justifique tal determinación, le impidió que pudiera formular conceptos de nulidad en ampliación de la demanda, que ataquen el fondo de la misma.

Es decir, las demandadas hicieron nugatorio el derecho de la parte actora de verter conceptos de nulidad en contra del acto que dijo desconocer, por lo que, si bien, los actos administrativos tienen una presunción de legalidad de conformidad con el artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; lo cierto es que la omisión de las autoridades de exhibir la resolución impugnada y su constancia de notificación, cuando en virtud de la negativa de la actora, le fueron requeridos por ésta Sala, destruye dicha presunción de legalidad y en consecuencia **debe darse por sentado que en el fondo**, la autoridad demandada carece de elementos para emitir tal resolución, por lo que debe entenderse que se contravinieron las disposiciones aplicables o dejaron de aplicarse las debidas, **lo cual constituye una violación de fondo**, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción III de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

En consecuencia, para evitar que la parte demandante se vea afectada en su esfera jurídica ante la omisión de las autoridades demandadas de exhibir la resolución impugnada, aún cuando tenía la inexorable obligación de hacerlo; lo procedente es que se declare la **NULIDAD LISA Y LLANA** de dicha resolución y por consecuencia, de todos los actos posteriores, tendientes a su ejecución.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la siguiente Tesis 2a./J. 173/2011 (9ª.), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre



de 2011, Página 2645, Materia Administrativa, que al rubro y texto señala:

**CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA
EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.**

Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal *el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado*, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, *si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno*, es indudable que no se acredita su existencia, *omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas* por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin soslayar, que al contestar la demanda, la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, adujo en el apartado de *hechos, numeral 3*, que dichas determinaciones obran dentro del expediente *********, promovido por el mismo actor, el cual, se invoca como hecho notorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dicho juicio se encuentra dentro del índice de expedientes de este órgano jurisdiccional, sin embargo, del análisis de los autos de dicho expediente, se desprende que las determinaciones a las que hace referencia la autoridad, son derivadas de una *multa por conducir en estado de ebriedad y otras sustancias tóxicas —alcoholímetro—*, mientras que el crédito fiscal impugnado en el presente caso, es consecuencia de *daños a postes y alumbrado público*, respecto de la cual, se insiste, no quedó acreditada la existencia de la resolución determinante por dicho concepto.

SEXTO.- En razón del análisis a que se refiere el Considerando que antecede, lo procedente es declarar la NULIDAD LISA Y LLANA, de la determinación del crédito fiscal por concepto de DAÑO A POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO, que se advierte de la

factura con número de serie y folio *********, de fecha *veintisiete de enero de dos mil veinte*, emitida por la Secretaría de Finanzas del municipio de Aguascalientes, por la cantidad de **\$5,574.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**, así como de todos los actos emitidos con posterioridad, tendientes a ejecutarla.

Lo anterior, al actualizarse la causa de anulación prevista en el artículo 61, fracción III de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes y con fundamento en el diverso numeral 62, fracción II del mismo cuerpo de leyes.

En consecuencia, y con fundamento en el artículo 63, primer párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes⁴, **deberá restituirse al actor** en sus derechos que le hubieren sido afectados con motivo del acto impugnado, cuya nulidad ha sido declarada, por lo que se **ordena devolverle** la cantidad que pagó por concepto de *daños a postes y alumbrado público*, a saber, **\$5,574.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**, según el comprobante fiscal con número de serie y folio *********, de fecha *veintisiete de enero de dos mil veinte*, emitida por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, visible a foja 6 y 11 de los autos.

En la inteligencia de que con independencia a que la factura en cuestión haya sido presentada en copia simple por la parte actora, al ser **un comprobante fiscal digital certificado por el Servicio de Administración Tributaria**, a través de cadena de autenticidad, es decir, se trata de comprobantes digitales que no se expiden en forma original impresa, sino que su autenticidad se comprueba a través de la cadena de autenticación en el portal del

⁴ **ARTÍCULO 63.-** En el caso de ser fundada la demanda y que la sentencia declare la nulidad de la resolución o acto, las autoridades demandadas quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos que le hubieran sido desconocidos o afectados de manera indebida (...).



Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al efecto y por tratarse de un hecho notorio, esta Sala de manera oficiosa procedió a consultar la autenticidad del referido comprobante fiscal, y para ello, se accede a la página de internet: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>, una vez ahí, se procede a digitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del emisor, así como el RFC del receptor (contribuyente); una vez realizado lo anterior, se obtiene lo siguiente:

(se inserta imagen de los datos obtenidos al ingresar en la liga antes mencionada)

De lo anterior se desprende que el Comprobante Digital entregado por la Secretaría de Finanzas del Estado es válido, se encuentra vigente y es coincidente con la impresión exhibida por la parte actora; sin que al efecto, exista o deba existir comprobante original impreso, ello, porque el artículo 29⁵ del Código

⁵ Artículo 29.- Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, **los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.** Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente.

II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales.

Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan las personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica avanzada.

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital de los contribuyentes.

La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante.

III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código.

Fiscal de la Federación establece desde el *nueve de diciembre de dos mil trece*, que los comprobantes fiscales serán digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria; ello se traduce en la desaparición de las facturas originales impresas; de ahí que se le otorgue valor probatorio para efecto de restituir al actor en el goce de los derechos afectados con motivo del acto impugnado.

Por las razones que se informan en el presente fallo y con fundamento en los artículos 59, 60, 61, fracción III y 62, fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, es de resolverse y se resuelve:

IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a:

- a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código.
- b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital.
- c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para que efectúen la validación, asignación de folio e incorporación del sello a que se refiere esta fracción.

Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet a que se refiere el párrafo anterior deberán estar previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria y cumplir con los requisitos que al efecto establezca dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general.

El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las autorizaciones emitidas a los proveedores a que se refiere esta fracción, cuando incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en este artículo, en la autorización respectiva o en las reglas de carácter general que les sean aplicables.

Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, el Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet.

V. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal.

VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por Internet que reciban consultando en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y sí al momento de la emisión del comprobante fiscal digital, el certificado que ampare el sello digital se encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado.

En el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales por Internet.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma, a través de las citadas reglas podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías, así como de los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general.

Tratándose de actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya obligación de emitir comprobante fiscal digital por Internet, el Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general, establecer las características de los documentos digitales que amparen dichas operaciones.



PRIMERO.- La parte actora probó su acción.

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la determinación del crédito fiscal por concepto de *DÑO A POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO*, a que se refiere la factura con número de serie y folio *********, de fecha *veintisiete de enero de dos mil veinte*, emitida por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO.- Notifíquese personalmente.

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado, y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en la lista de acuerdos del veinte de julio de dos mil veinte.- Conste.

L'EFM/mfpa

La C. Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes:

C E R T I F I C A:

Que la presente impresión contenida en **trece** páginas útiles de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número **0286/2020**, concuerda fielmente con la sentencia original que obra en dicho expediente y que se encuentra firmada por los Magistrados que integran éste órgano jurisdiccional así como por la suscrita, las que se certifican a fin de notificar a las partes, a los *diecisiete días del mes de julio de dos mil veinte*.- Doy fe.

LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL